

No. 36523

**Spain
and
Uruguay**

Treaty on mutual legal assistance in criminal matters between the Kingdom of Spain and the Eastern Republic of Uruguay. Montevideo, 19 November 1991

Entry into force: *7 February 2000 by the exchange of instruments of ratification, in accordance with article 27*

Authentic text: *Spanish*

Registration with the Secretariat of the United Nations: *Spain, 9 March 2000*

**Espagne
et
Uruguay**

Traité d'assistance légale mutuelle en matière pénale entre le Royaume d'Espagne et la République orientale de l'Uruguay. Montevideo, 19 novembre 1991

Entrée en vigueur : *7 février 2000 par échange des instruments de ratification, conformément à l'article 27*

Texte authentique : *espagnol*

Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : *Espagne, 9 mars 2000*

[SPANISH TEXT — TEXTE ESPAGNOL]

TRATADO DE ASISTENCIA JURIDICA MUTUA

EN ASUNTOS PENALES

ENTRE

EL REINO DE ESPAÑA

Y

LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Capítulo I - Disposiciones Generales

| | |
|------------|--------------------------|
| Artículo 1 | Ambito del Tratado |
| Artículo 2 | Alcance de la asistencia |
| Artículo 3 | Autoridades Centrales |
| Artículo 4 | Autoridades competentes |
| Artículo 5 | Limites de la asistencia |

Capítulo II - Cumplimiento de las solicitudes

| | |
|-------------|---|
| Artículo 6 | Forma y contenido de las solicitudes |
| Artículo 7 | Ley aplicable |
| Artículo 8 | Aplazamiento o condiciones para el cumplimiento. |
| Artículo 9 | Carácter confidencial |
| Artículo 10 | Informe sobre el cumplimiento |
| Artículo 11 | Limitaciones al empleo de la información o prueba obtenida. |
| Artículo 12 | Costos. |

Capítulo III - Formas de Asistencia

| | |
|-------------|---|
| Artículo 13 | Notificación de documentos |
| Artículo 14 | Entrega de documentos oficiales |
| Artículo 15 | Devolución de documentos y elementos de prueba. |
| Artículo 16 | Testimonio en el Estado requerido |
| Artículo 17 | Testimonio en el Estado requirente |
| Artículo 18 | Traslado de personas sujetas a procedimiento penal. |
| Artículo 19 | Salvoconducto |
| Artículo 20 | Localización e identificación de personas |
| Artículo 21 | Registros, embargos, secuestros y entrega de objetos. |
| Artículo 22 | Inmovilización, confiscación y transferencia de bienes. |

El Reino de España y la República Oriental del Uruguay (en adelante "las Partes").

Animados por el deseo de estrechar aún más sus vínculos jurídicos y promover una más eficaz cooperación internacional por medio de la asistencia jurídica mutua en materia penal para la investigación y enjuiciamiento de delitos.

Reconociendo que muchas actividades criminales representan una grave amenaza para la humanidad y se manifiestan a través de modalidades criminales transnacionales en las que frecuentemente las pruebas o los elementos relacionados con los delitos se radican en diversos Estados.

Han resuelto, sobre la base de los principios de soberanía nacional y de igualdad de derechos y ventajas mutuas, concluir un Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en los siguientes términos:

Capítulo I - Disposiciones Generales

Artículo 1

Ambito del Tratado

1. Las partes se prestarán asistencia mutua, de conformidad con las disposiciones del presente Tratado, para la investigación y enjuiciamiento de delitos, así como en los procedimientos judiciales relacionados con asuntos penales.

2. Salvo en las situaciones previstas en el artículo 21, la asistencia se prestará sin considerar si la conducta que motiva la investigación, enjuiciamiento o procedimiento en el Estado requirente constituye o no delito conforme a la legislación del Estado Requerido.

3. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 16 numeral 3, el presente Tratado no faculta a las autoridades o a los particulares del Estado requirente a emprender en el territorio del Estado requerido funciones que conforme a las leyes internas están reservadas a sus autoridades.

4. El presente Tratado tiene por objeto únicamente la asistencia jurídica mutua entre las Partes. Por lo tanto, las disposiciones del presente Tratado no confieren derechos a los particulares para la obtención, supresión o exclusión de pruebas, o para oponerse al cumplimiento de una solicitud de asistencia.

Artículo 2

Alcance de la Asistencia

La asistencia comprenderá:

- a. notificación de documentos;
- b. recepción de testimonios o declaraciones de personas, así como también la realización de peritajes y examen de objetos y lugares;
- c. localización o identificación de personas;
- d. notificación a testigos o peritos para la comparecencia voluntaria para prestar testimonio en el Estado requirente;
- e. traslado de personas sujetas a un proceso penal a efectos de comparecer como testigos o con otros propósitos expresamente indicados en la solicitud;
- f. medidas cautelares o inmovilización de bienes;
- g. cumplimiento de solicitudes de registro y secuestro;
- h. entrega de documentos y otros elementos de prueba;
- i. inmovilización, confiscación o transferencia de bienes confiscados, así como en materia de indemnizaciones y multas impuestas por sentencia penal, y

- j. cualquier otra forma de asistencia no prohibida por las leyes del Estado requerido para la investigación y enjuiciamiento de delitos.

Artículo 3

Autoridades Centrales

1. En cada una de las Partes habrá una Autoridad Central que tendrá a su cargo la presentación y recepción de las solicitudes a que se refiere el presente Tratado.

2. La Autoridad Central en el Reino de España será el Ministerio de Justicia. La Autoridad Central en la República Oriental del Uruguay será el Ministerio de Educación y Cultura.

3. Las Autoridades Centrales se comunicarán directamente entre sí a todos los efectos del presente Tratado.

Artículo 4

Autoridades Competentes

1. La asistencia de que trata el presente Tratado se prestará a través de las respectivas Autoridades Centrales de las Partes.

2. Las Solicitudes formuladas por una Autoridad Central al amparo del presente Tratado, se basarán en pedidos de asistencia de aquellas autoridades judiciales o del Ministerio Público del Estado requirente encargadas de la investigación o enjuiciamiento de delitos.

Artículo 5

Limites de la Asistencia

1. El Estado requerido podrá rehusarse a brindar asistencia si :

a. la solicitud se refiere a un delito tipificado como tal en la legislación militar pero no en el derecho penal ordinario;

b. la solicitud se refiere a un delito que el Estado requerido considerare como político o conexo con un delito político o perseguido por razones políticas;

c. la solicitud se refiere a un delito tributario. No obstante, procederá la asistencia si el delito se comete por una declaración intencionalmente falsa efectuada en forma oral o por escrito, o por una omisión intencional de declaración, con el objeto de ocultar ingresos provenientes de cualquier otro delito comprendido en el presente Tratado;

d. la persona requerida en la solicitud, ha sido absuelta o ha cumplido condena en el Estado requerido por el mismo delito mencionado en la solicitud. Sin embargo, esta disposición no podrá ser invocada para negar asistencia en relación a otras personas; o

e. el cumplimiento de la solicitud es contrario a la seguridad, el orden público u otros intereses esenciales del Estado requerido.

2. Antes de negar asistencia de conformidad con el presente artículo, la Autoridad Central del Estado requerido deberá consultar a la Autoridad Central del Estado requirente si acepta que la asistencia se brinde sujeta a las condiciones que considere necesarias. Si el Estado requirente acepta la

asistencia sujeta a dichas condiciones, el Estado requerido dará cumplimiento a la solicitud en la forma establecida.

3. Salvo lo dispuesto en el artículo 14, si el Estado requerido deniega la asistencia, deberá informar a la Autoridad Central del Estado requirente, las razones en que se funda la denegatoria.

Capítulo II - Cumplimiento de las solicitudes

Artículo 6

Forma y Contenido de la Solicitud

1. La solicitud de asistencia deberá formularse por escrito salvo en los casos de urgencia, en que la Autoridad Central del Estado requerido podrá aceptar una solicitud cursada de otra manera. En tal caso, la solicitud deberá confirmarse por escrito dentro de los diez días siguientes.

2. La solicitud deberá contener las siguientes indicaciones:

a. nombre de la Autoridad encargada de la investigación, el enjuiciamiento o procedimiento al cual se refiera la solicitud;

b. descripción del asunto a que se refiere y naturaleza de la investigación, enjuiciamiento o procedimiento, incluyendo los delitos concretos a que se refiera el asunto;

c. descripción de la prueba, información u otro tipo de asistencia solicitada;

d. declaración de los motivos por los cuales se solicita la prueba, información u otro tipo de asistencia;

e. normas legales aplicables acompañadas de su texto; y

f. en la medida de lo posible, la identidad de las personas sujetas a investigación o enjuiciamiento.

3. En la medida que sea necesario, la solicitud deberá también incluir:

a. información sobre la identidad y domicilio de las personas cuyo testimonio se desea obtener;

b. información sobre la identidad y dirección de las personas a ser notificadas y la relación de dichas personas con los procedimientos;

c. información sobre la identidad y paradero de las personas a ser localizadas;

d. descripción exacta del lugar o de la persona que ha de someterse a registro y de los bienes que hayan de ser cautelados;

e. el texto del interrogatorio a ser formulado para la recepción de la prueba testimonial en el Estado requerido, así como la descripción de la forma en que ha de tomarse y registrarse cualquier testimonio o declaración;

f. descripción de las formas y procedimientos especiales con que han de cumplirse las solicitudes;

g. información sobre el pago de los gastos a que tendrá derecho la persona cuya presencia se solicite en el Estado requerido; y

h. cualquier otra información que pueda ser sugerida al Estado requerido a los efectos de facilitar el cumplimiento de la solicitud.

Artículo 7

Ley Aplicable

1. Las solicitudes se cumplirán de conformidad con la ley del Estado requerido salvo disposición en contrario del presente Tratado.

2. La Autoridad Central del Estado requerido dará cumplimiento con prontitud a la solicitud y, cuando proceda, la transmitirá a la autoridad judicial u otras autoridades competentes para su diligenciamiento.

3. A solicitud del Estado requirente, el Estado requerido cumplirá la asistencia de acuerdo con las formas o procedimientos especiales, a menos que éstos sean incompatibles con su ley interna.

Artículo 8

Aplazamiento o condiciones para el cumplimiento

El Estado requerido podrá aplazar el cumplimiento de la solicitud o, después de celebrar consultas con la Autoridad Central del Estado requirente, sujetarla a condiciones en caso de que interfiera con una investigación o procedimiento penal en curso en el Estado requerido. Si el Estado requirente acepta la asistencia sujeta a condiciones, la solicitud se cumplirá de conformidad con las condiciones propuestas.

Artículo 9

Carácter Confidencial

A solicitud del Estado requirente, se mantendrá el carácter confidencial de la solicitud y de su tramitación. Si la solicitud no puede cumplirse sin infringir ese carácter confidencial, el Estado requerido informará de ello al Estado requirente, que decidirá si insiste en la solicitud.

Artículo 10

Informes sobre el Cumplimiento

1. A pedido de la Autoridad Central del Estado requirente, la Autoridad Central del Estado requerido informará, dentro de un plazo razonable, sobre la marcha del trámite referente al cumplimiento de la solicitud.

2. La Autoridad Central del Estado requerido informará a la brevedad el resultado del cumplimiento de la solicitud y remitirá toda la información o prueba obtenidas a la Autoridad Central del Estado requirente.

3. Cuando la solicitud no ha podido ser cumplida en todo o en parte, la Autoridad Central del Estado requerido lo hará saber inmediatamente a la Autoridad Central del Estado requirente e indicará las razones por las cuales no ha sido posible su cumplimiento.

Artículo 11

Limitaciones al Empleo de la Información o Prueba Obtenida

1. Salvo consentimiento previo del Estado requerido, el Estado requirente solamente podrá emplear la información o la prueba obtenida en virtud del presente Tratado en la investigación o el procedimiento indicado en la solicitud.

2. La Autoridad Central del Estado requerido podrá solicitar que la información o la prueba obtenidas en virtud del presente Tratado tengan carácter confidencial, de conformidad con las condiciones que especificará. En tal caso, el Estado requirente procurará respetar dichas condiciones.

3. La información o prueba que se haya hecho pública en el Estado requirente de conformidad con los párrafos 1 o 2 que anteceden, podrá a partir de ese momento ser utilizada en otros asuntos.

Artículo 12

Costos

El Estado requerido pagará la totalidad de los gastos relativos al cumplimiento de la solicitud, salvo los correspondientes a los informes periciales, traducción y transcripción, gastos extraordinarios que provengan del empleo de formas o procedimientos especiales, y gastos y estipendios de viaje de las personas referidas en los artículos 17 y 18, los cuales correrán a cargo del Estado requirente.

Capítulo III - Formas de Asistencia

Artículo 13

Notificación de Documentos

1. La Autoridad Central del Estado requerido dispondrá lo necesario para diligenciar la notificación de los documentos relativos a cualquier solicitud de asistencia formulada de acuerdo con el presente Tratado.

2. La Autoridad Central del Estado requirente transmitirá las solicitudes de notificación para la comparecencia de una persona ante una autoridad del Estado requirente con una razonable antelación a la fecha prevista para la misma.

3. La Autoridad Central del Estado requerido devolverá el comprobante del diligenciamiento de las notificaciones en la forma especificada en la solicitud.

4. Si la notificación no pudiere realizarse, la Autoridad Central del Estado requerido deberá informar a la Autoridad Central del Estado requirente las razones por las cuales no pudo diligenciarse.

Artículo 14

Entrega de Documentos Oficiales

A solicitud del Estado requirente, el Estado requerido:

a. proporcionará copias de documentos oficiales, registros o información accesibles al público que obren en las dependencias y los organismos de ese Estado; y

b. podrá proporcionar copias de documentos oficiales, registros o información no accesibles al público que obren en las dependencias y organismos de ese Estado, sujetas a las mismas condiciones por las cuales esos documentos se proporcionarían a sus propias autoridades. Si la asistencia prevista en éste párrafo es denegada, la Autoridad Central del Estado requerido no estará obligada a expresar los motivos de la denegatoria.

Artículo 15

Devolución de Documentos y Elementos de Prueba

A solicitud de la Autoridad Central del Estado requerido, el Estado requirente deberá, tan pronto como sea posible, devolver los documentos u otros elementos de prueba facilitados en cumplimiento de una solicitud cursada conforme al presente Tratado.

Artículo 16

Testimonio en el Estado requerido

1. Cualquier persona que se encuentre en el Estado requerido y a la que se solicite la aportación de pruebas en virtud del presente Tratado, será obligada a comparecer, de conformidad con las leyes del Estado requerido, ante la autoridad competente para prestar testimonio o aportar documentos, antecedentes o elementos de prueba.

2. El Estado requerido informará con suficiente antelación el lugar y la fecha en que se recibirá la declaración del testigo o los mencionados documentos, antecedentes o elementos de prueba. Cuando sea posible, las Autoridades Centrales se consultarán a los efectos de fijar una fecha conveniente para ambas Partes.

3. El Estado requerido autorizará la presencia de las personas que se especifiquen en la solicitud durante el cumplimiento de la misma, facultándolas para interrogar a la persona cuyo testimonio o pruebas hayan de recibirse en la forma prevista por las leyes del Estado requerido. La audiencia tendrá lugar según los procedimientos establecidos por las leyes del Estado requerido.

4. Si la persona a que se hace referencia en el párrafo 1. alega inmunidad, incapacidad o privilegio según las leyes del Estado requerido, esta alegación será resuelta por la autoridad competente del Estado requerido con anterioridad al cumplimiento de la solicitud.

Si la persona a que se hace referencia en el párrafo 1. alega inmunidad, incapacidad o privilegio según las leyes del Estado requirente, el testimonio o las pruebas serán, no obstante, recibidas y la alegación será informada a la Autoridad Central del Estado requirente, a fin de que las autoridades competentes de ese Estado resuelvan al respecto.

5. Los documentos, antecedentes y elementos de prueba entregados por el testigo u obtenidos a consecuencia de su declaración o en ocasión de la misma, serán enviados al Estado requirente junto con la declaración.

Artículo 17

Testimonio en el Estado requirente

Cuando el Estado requirente solicite la comparecencia de una persona en su territorio para prestar testimonio o rendir informe, el Estado requerido invitará al testigo o perito a comparecer en forma voluntaria ante la autoridad competente del Estado requirente. Si se considera necesario, la Autoridad Central del Estado requerido podrá registrar por escrito el

consentimiento de la persona a comparecer en el Estado requirente. La Autoridad Central del Estado requerido informará con prontitud a la Autoridad Central del Estado requirente de dicha respuesta. Al solicitar la comparecencia, el Estado requirente indicará los gastos de traslado y de estadía a su cargo.

Artículo 18

Traslado de Personas Sujetas a Procedimiento Penal

1. La persona sujeta a un procedimiento penal en el Estado requerido cuya comparecencia en el Estado requirente sea necesaria en virtud de la asistencia prevista en el presente Tratado, será trasladada con ese fin al Estado requirente, siempre que esa persona y el Estado requerido consientan dicho traslado.

2. La persona sujeta a un procedimiento penal en el Estado requirente cuya comparecencia en el Estado requerido sea necesaria en virtud de la asistencia prevista en el presente Tratado, será trasladada al Estado requerido, siempre que lo consienta esa persona y ambos Estados estén de acuerdo.

3. A los efectos del presente artículo:

a. el Estado receptor tendrá la potestad y la obligación de mantener bajo custodia física a la persona trasladada, a menos que el Estado remitente indique lo contrario;

b. el Estado receptor devolverá a la persona trasladada al Estado remitente tan pronto como las circunstancias lo permitan o con sujeción a lo acordado entre las Autoridades Centrales de ambos Estados;

c. respecto a la devolución de la persona trasladada, no será necesario que el Estado remitente promueva un procedimiento de extradición;

d. el tiempo transcurrido en el Estado receptor, será computado a los efectos del cumplimiento de la sentencia que le hubiera sido impuesta en el Estado remitente; y

e. la permanencia de esa persona en el Estado receptor en ningún caso podrá exceder del período que le reste para el cumplimiento de la condena o de noventa días según el plazo que se cumpla primero, a menos que la persona y ambos Estados consientan prorrogarlo.

1

Artículo 19

Salvoconducto

1. La comparecencia o traslado de la persona que consienta declarar o dar testimonio según lo dispuesto en los artículos 17 y 18, estará condicionado si la persona o el Estado remitente lo solicitan con anterioridad a dicha comparecencia o traslado, a que el Estado receptor conceda un salvoconducto bajo el cual, mientras se encuentre en ese Estado, no podrá:

a. ser detenida o enjuiciada por delitos anteriores a su salida del territorio del Estado remitente;

b. ser requerida para declarar o dar testimonio en procedimientos no especificados en la solicitud; o

c. ser detenida o enjuiciada en base a la declaración que preste, salvo en caso de desacato o falso testimonio.

2. El salvoconducto previsto en el párrafo anterior, cesará cuando la persona prolongue voluntariamente su estadía en

el territorio del Estado receptor por más de diez días a partir del momento en que su presencia ya no fuere necesaria en ese Estado, conforme a lo comunicado al Estado remitente.

Artículo 20

Localización o identificación de Personas

El Estado requerido adoptará las providencias necesarias para averiguar el paradero o la identidad de las personas individualizadas en la solicitud.

Artículo 21

Registro, Embargo, Secuestro y Entrega de objetos

1. El Estado requerido cumplirá la solicitud relativa a registro, embargo, secuestro y entrega de cualquier objeto, comprendidos, entre otros, documentos, antecedentes o efectos, si la Autoridad competente determina que la solicitud contiene la información que justifique la medida propuesta. Dicha medida se someterá a la ley procesal y sustantiva del Estado requerido.

2. Conforme a lo previsto en el artículo 5, párrafo 2, el Estado requerido determinará según su ley cualquier requerimiento necesario para proteger los intereses de terceros sobre los objetos que hayan de ser trasladados.

Artículo 22

Inmovilización. Confiscación y Transferencia de Bienes

1. Cuando una de las Partes tenga conocimiento de la existencia de frutos o instrumentos de delitos en el territorio

de la otra Parte que puedan ser objeto de incautación o medidas cautelares según las leyes de ese Estado, podrá informarlo a la Autoridad Central de dicho Estado. Esta remitirá la información recibida a sus autoridades competentes a efectos de determinar la adopción de las medidas que correspondan. Dichas autoridades actuarán de conformidad con las leyes de su país y comunicarán a la otra Parte las medidas tomadas, a través de su Autoridad Central.

2. Las Partes se prestarán asistencia, de conformidad con sus respectivas leyes, en los procedimientos de incautación y confiscación, indemnización a las víctimas de delitos y cobro de multas impuestas por sentencia penal.

:

3. La Parte que tenga bajo su custodia frutos o instrumentos del delito, dispondrá de los mismos de conformidad con lo establecido en su ley interna. En la medida que lo permitan sus leyes, y en los términos que se consideren adecuados, cualquiera de las Partes podrá transferir a la otra los bienes confiscados o el producto de su venta.

Artículo 23

Autenticación de Documentos y Certificaciones

1. Sin perjuicio de las autenticaciones o certificaciones exigidas según sus leyes, el Estado requerido autenticará todo documento o sus copias, así como proporcionará certificaciones referentes a objetos, en la forma solicitada por el Estado requirente, siempre que ello no sea incompatible con las leyes del Estado requerido.

2. A efectos de facilitar el empleo de las referidas formas especiales de autenticación o certificación, el Estado requirente adjuntará a la solicitud los respectivos formularios o describirá el procedimiento especial a seguirse.

Capítulo IV - Disposiciones Finales

Artículo 24

Compatibilidad con otros Tratados, Acuerdos o Convenios

La asistencia y los procedimientos establecidos en el presente Tratado no impedirán que cada una de las Partes preste asistencia a la otra al amparo de lo previsto en otros acuerdos internacionales más favorables en los que sean Parte. Las Partes también podrán prestar asistencia de conformidad con cualquier convenio, acuerdo o práctica aplicables de carácter bilateral más favorables.

Artículo 25

Consultas

Las Autoridades Centrales de las Partes celebrarán consultas, en la oportunidad que convengan mutuamente, con el fin de facilitar la aplicación del presente Tratado.

Artículo 26

Responsabilidad

1. La ley interna de cada Parte regula la responsabilidad por daños que emerjan de los actos de sus autoridades en la ejecución de este Tratado.

2. Ninguna de las Partes será responsable por los daños que puedan surgir de actos de las autoridades de la otra Parte en la formulación o ejecución de una solicitud conforme a este Tratado.

Artículo 27

Ratificación, Entrada en Vigor y Denuncia

1. El presente Tratado estará sujeto a ratificación y el canje de los instrumentos respectivos tendrá lugar en Madrid.

2. El presente Tratado entrará en vigor cuando tenga lugar el canje de los instrumentos de ratificación.

3. Cualquiera de las Partes podrá denunciar el presente Tratado mediante notificación por escrito a la otra Parte. La denuncia surtirá efecto seis meses después de la fecha de notificación. .

EN FE DE LO CUAL, los suscritos, debidamente autorizados por sus respectivos Gobiernos, firman el presente Tratado.

HECHO en Montevideo el 19 de Noviembre de 1991, en dos ejemplares originales en idioma español, siendo ambos textos igualmente auténtico

POR EL REINO
DE ESPAÑA



POR LA REPUBLICA
ORIENTAL DEL URUGUAY

[TRANSLATION — TRADUCTION]

TREATY ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS
BETWEEN THE KINGDOM OF SPAIN AND THE EASTERN REPUBLIC
OF URUGUAY

Table of contents

| | |
|----------------|---|
| Chapter I | General provisions |
| Article 1 ... | Object of the Treaty |
| Article 2 ... | Scope of assistance |
| Article 3 ... | Central authorities |
| Article 4 ... | Competent authorities |
| Article 5 ... | Limitations on assistance |
| Chapter II | Execution of requests |
| Article 6 ... | Form and content of requests |
| Article 7 ... | Applicable law |
| Article 8 ... | Postponement of or conditions for execution |
| Article 9 ... | Confidentiality |
| Article 10 ... | Reporting on execution |
| Article 11 ... | Limitations on use of information or evidence obtained |
| Article 12 ... | Costs |
| Chapter III | Forms of assistance |
| Article 13 ... | Service of documents |
| Article 14 ... | Transmission of official documents |
| Article 15 ... | Return of documents and evidence |
| Article 16 ... | Testimony in the requested State |
| Article 17 ... | Testimony in the requesting State |
| Article 18 ... | Transfer of persons in criminal proceedings |
| Article 19 ... | Safe conduct |
| Article 20 ... | Location or identification of persons |
| Article 21 ... | Search, seizure, confiscation and delivery of items |
| Article 22 ... | Immobilization, confiscation and transfer of property |
| Article 23 ... | Authentication of documents and certification |
| Chapter IV | Final provisions |
| Article 24 ... | Compatibility with other treaties, agreements or arrangements |
| Article 25 ... | Consultations |
| Article 26 ... | Liability |
| Article 27 ... | Ratification, entry into force and termination |

The Kingdom of Spain and the Eastern Republic of Uruguay, hereinafter referred to as "the Parties".

Wishing to forge closer juridical ties and promote more effective international cooperation by means of mutual legal assistance in criminal matters for the investigation and prosecution of offences.

Recognizing that many criminal activities pose a serious threat to mankind and take the form of transnational criminal operations in which evidence or elements relating to criminal offences can frequently be found in a number of States.

Have decided, based on the principles of national sovereignty, equal rights and mutual advantage, to conclude a mutual legal assistance treaty under the following terms:

CHAPTER I -- GENERAL PROVISIONS

Article 1. Object of the Treaty

1. The Parties shall provide mutual assistance, in accordance with the provisions of this Treaty, for the investigation and prosecution of criminal offences and for judicial proceedings relating to criminal matters.

2. With the exception of the situations described in article 21, assistance shall be provided without regard to whether the matter giving rise to the investigation, prosecution or proceeding in the requesting State is a criminal offence under the legislation of the requested State.

3. Without prejudice to the provisions of article 16, subparagraph 3, this Treaty shall not authorize the authorities or any individual of the requesting State to assume in the territory of the requested State functions which under the latter's domestic legislation are the prerogative of its authorities.

4. The sole object of this Treaty is mutual legal assistance between the Parties. Accordingly, the provisions of this Treaty do not grant any individual the right to obtain, suppress or exclude evidence or to oppose execution of a request for assistance.

Article 2. Scope of assistance

Assistance shall include:

- (a) Serving documents;
- (b) Taking the testimony or statements of persons, carrying out expert appraisals and examining objects and sites;
- (c) Locating or identifying persons;
- (d) Serving notice to witnesses or experts to appear voluntarily in order to testify in the requesting State;
- (e) Transferring persons subject to a criminal proceeding so that they may appear as witnesses or for any other purpose expressly indicated in the request;
- (f) Taking precautionary measures or immobilizing property;

- (g) Executing requests for searches and seizures;
- (h) Providing documents and other evidence;
- (i) Immobilizing or confiscating property or transferring confiscated property and dealing with compensation and fines ordered in a criminal judgement; and
- (j) Providing any other form of assistance not prohibited by the laws of the requested State governing the investigation and prosecution of criminal offences.

Article 3. Central authorities

1. In each of the Parties there shall be a central authority which shall be responsible for making and receiving requests pursuant to this Treaty.
2. The central authority in the Kingdom of Spain shall be the Ministry of Justice. The central authority in the Eastern Republic of Uruguay shall be the Ministry of Education and Culture.
3. The central authorities shall communicate directly with one another for the purposes of this Treaty.

Article 4. Competent authorities

1. The assistance described in this Treaty shall be provided by the respective central authorities of the Parties.
2. Requests made by a central authority pursuant to this Treaty shall be based on requests for assistance from the judicial authorities or representatives of the Office of the Public Prosecutor of the requesting State responsible for the investigation or prosecution of criminal offences.

Article 5. Limitations on assistance

1. The requested State may refuse to provide assistance if:
 - (a) The request relates to an offence under military law but not under ordinary criminal law;
 - (b) The request relates to an offence which the requested State regards as political or related to a political offence or prosecuted on political grounds;
 - (c) The request relates to a taxation offence. Nevertheless, assistance shall be provided if the offence involves an intentionally false statement made orally or in writing or an intentional omission for the purpose of hiding income arising out of any other offence covered by this Treaty;
 - (d) The person named in the request has received an acquittal or served a sentence in the requested State for the offence noted in the request. However, this provision may not be invoked to deny assistance in cases involving other persons; or
 - (e) The execution of the request is contrary to the security, public order or other essential interests of the requested State.

2. Before denying assistance pursuant to this article, the central authority of the requested State shall consult with the central authority of the requesting State to ascertain whether assistance may be given subject to such conditions as it deems necessary. If the requesting State accepts assistance subject to these conditions, the requested State shall execute the request in the agreed manner.

3. Except as provided in article 14, if the requested State denies assistance, it shall inform the central authority of the requesting State of the reasons for the denial.

CHAPTER II -- EXECUTION OF REQUESTS

Article 6. Form and content of requests

1. A request for assistance shall be in writing except in urgent cases, when the central authority of the requested State may accept a request in another form. In any such case, the request shall be confirmed in writing within ten days.

2. The request shall contain the following information:

(a) The name of the authority conducting the investigation, prosecution or proceeding to which the request relates;

(b) A description of the subject matter in question and the nature of the investigation, prosecution or proceeding, including the specific criminal offences to which the matter relates;

(c) A description of the evidence, information or other assistance sought;

(d) A statement of the reasons for which the evidence, information or other assistance is sought;

(e) The applicable legal norms together with the text of the relevant provisions; and

(f) Wherever possible, the identity of the persons being investigated or prosecuted.

3. To the extent necessary, a request shall also include:

(a) Information on the identity and domicile of the persons required to testify;

(b) Information on the identity and address of the persons to be served and their relationship to the proceeding;

(c) Information on the identity and whereabouts of the persons to be located;

(d) A precise description of the place or person to be searched and of the items to be seized;

(e) A list of questions to be posed during the taking of testimony in the requested State, together with a description of the manner in which any testimony or statement is to be taken and recorded;

(f) A description of any special requirements and procedures to be followed in executing the request;

(g) Information as to payment of the expenses to which a person asked to appear in the requested State will be entitled; and

(h) Any other information which may be brought to the attention of the requested State in order to facilitate its execution of the request.

Article 7. Applicable law

1. Requests shall be executed in accordance with the law of the requested State unless otherwise stipulated in this Treaty.

2. The central authority of the requested State shall execute the request promptly and, where appropriate, shall transmit it to the judicial authority or other jurisdictional authorities for processing.

3. At the request of the requesting State, the requested State shall provide assistance in accordance with any special requirements or procedures unless the latter are incompatible with its domestic legislation.

Article 8. Postponement of or conditions for execution

The requested State may postpone execution of the request or, following consultations with the central authority of the requesting State, impose conditions in cases where execution would interfere with an ongoing criminal investigation or proceeding in the requested State. If the requesting State accepts the assistance subject to conditions, the request shall be executed in accordance with the proposed conditions.

Article 9. Confidentiality

At the request of the requesting State, the request and its execution shall remain confidential. If the request cannot be executed without breaching such confidentiality, the requested State shall so inform the requesting State, which shall decide whether or not to maintain its request.

Article 10. Reporting on execution

1. Upon the request of the central authority of the requesting State, the central authority of the requested State shall, within a reasonable period, report on the progress made towards execution of the request.

2. The central authority of the requested State shall report promptly the outcome of the execution of the request and shall submit all information or evidence obtained to the central authority of the requesting State.

3. If it has proved impossible to execute the request in whole or in part, the central authority of the requested State shall so inform the central authority of the requesting State immediately and shall indicate the reasons for non-execution.

Article 11. Limitations on use of information or evidence obtained

1. Unless the requested State first agrees otherwise, the requesting State may use information or evidence obtained pursuant to this Treaty solely for the investigation or proceeding indicated in the request.
2. The central authority of the requested State may request that information or evidence obtained pursuant to this Treaty be kept confidential in accordance with such conditions as it specifies. In that case, the requesting State shall use its best endeavours to comply with the conditions.
3. Information or evidence which has been made public in the requesting State in accordance with paragraphs 1 or 2 of this article may thereafter be used for other matters.

Article 12. Costs

The requested State shall pay all costs relating to the execution of the request, except for the fees of expert witnesses, the cost of translation and transcription, extraordinary costs deriving from special requirements or procedures, and the allowances and expenses related to travel of persons pursuant to articles 17 and 18, which shall be paid by the requesting State.

CHAPTER III -- FORMS OF ASSISTANCE

Article 13. Service of documents

1. The central authority of the requested State shall take the necessary steps to effect service of any document relating to a request for assistance made in accordance with this Treaty.
2. The central authority of the requesting State shall transmit a request for the service of a document requiring the appearance of a person before an authority in the requesting State a reasonable time ahead of the date of that appearance.
3. The central authority of the requested State shall return a proof of service in the manner specified in the request.
4. If service could not be effected, the central authority of the requested State shall inform the central authority of the requesting State of the reasons thereof.

Article 14. Transmission of official documents

At the request of the requesting State, the requested State:

- (a) Shall provide copies of publicly available official documents, records or information in the possession of government departments and agencies in the requested State; and
- (b) May provide copies of official documents, records or information which are in the possession of a government department or agency in that State, but which are not publicly available, under the same conditions as such documents would be made available to

its own authorities. If the assistance described in this paragraph is denied, the central authority of the requested State shall not be required to explain the reasons for the denial.

Article 15. Return of documents and evidence

At the request of the central authority of the requested State, the requesting State shall, as soon as possible, return documents and other evidence provided in execution of a request made in accordance with this Treaty.

Article 16. Testimony in the requested State

1. A person in the requested State from whom evidence is requested pursuant to this Treaty shall be compelled to appear, in accordance with the laws of the requested State, before the jurisdictional authority for the purpose of testifying or producing documents, records or evidence.

2. The requested State shall give adequate advance notice of the place and date for the taking of testimony or the production of the said documents, records or evidence. Whenever possible, the central authorities shall consult each other with a view to setting a date which is convenient for both Parties.

3. The requested State shall permit the presence of such persons as specified in the request during the execution of the request and shall allow such persons to question the person whose testimony or evidence is being taken in the manner provided for in the laws of the requested State. The hearing shall take place in accordance with the procedures established by the laws of the requested State.

4. If the person referred to in paragraph I asserts a claim of immunity, incapacity or privilege under the laws of the requested State, a decision in that regard shall be taken by the jurisdictional authority of the requested State prior to execution of the request.

If the person referred to in paragraph I asserts a claim of immunity, incapacity or privilege under the laws of the requesting State, the testimony or evidence shall nonetheless be taken and the claim made known to the central authority of the requesting State for resolution by the jurisdictional authorities of that State.

5. Any documents, records and evidence provided by the witness, or obtained as a result of his statement or during his statement, shall be delivered to the requesting State along with the statement.

Article 17. Testimony in the requesting State

If the requesting State requests that a person appear in its territory to testify or provide information, the requested State shall invite the witness or expert to appear on a voluntary basis before the jurisdictional authority of the requesting State. If it is deemed necessary, the central authority of the requested State may record in writing the consent of that person to appear in the requesting State. The central authority of the requested State shall inform the central authority of the requesting State of that response promptly. When inviting a per-

son to appear, the requesting State shall indicate to what extent it will reimburse that person's costs for travel to and stay in the requesting State.

Article 18. Transfer of persons in criminal proceedings

1. A person who is the subject of a criminal proceeding in the requested State and whose presence in the requesting State is needed for purposes of assistance under this Treaty shall be transferred for that purpose to the requesting State provided that both the person and the requested State consent to the transfer.

2. A person who is the subject of a criminal proceeding in the requesting State and whose presence in the requested State is needed for purposes of assistance under this Treaty shall be transferred to the requested State provided that the person consents and both States agree.

3. For the purposes of this article:

(a) The receiving State shall have the legal authority and the obligation to keep the person transferred in custody unless the sending State indicates otherwise;

(b) The receiving State shall return the person transferred to the sending State as soon as circumstances permit or as agreed by the central authorities of both States;

(c) It shall not be necessary for the sending State to initiate extradition proceedings for the return of the transferred person;

(d) Time spent in the receiving State shall count towards service of the sentence imposed in the sending State; and

(e) The person's stay in the receiving State shall in no case exceed the time remaining for service of his sentence or 90 days, whichever comes first, unless the person and both States agree to an extension.

Article 19. Safe conduct

1. The appearance or transfer of a person who consents to make a statement or testify in accordance with the provisions of articles 17 and 18 shall, if so requested by the person or the sending State before the date of that appearance or transfer, be subject to the grant by the receiving State of safe conduct under the terms of which, while in the latter State, he shall not be:

(a) Detained or prosecuted for any offences which predated his departure from the territory of the sending State;

(b) Required to make any statement or testify in proceedings not specified in the request; or

(c) Detained or prosecuted on the basis of his testimony, except for contempt or perjury.

2. The safe conduct established in the above paragraph shall cease when a person voluntarily extends his stay in the territory of the receiving State by more than 10 days from the time his presence is no longer required in that State and the sending State is so informed.

Article 20. Location or identification of persons

1. The requested State shall take whatever measures necessary to ascertain the whereabouts or identity of persons specified in the request.

Article 21. Search, seizure, confiscation and delivery of items

1. The requested State shall execute a request for the search, seizure, confiscation and delivery of any item including, inter alia, documents, records or objects, if the jurisdictional authority determines that the information provided in the request justifies the proposed action. That action shall be subject to the procedural and substantive law of the requested State.

2. In accordance with article 5, paragraph 2, the requested State shall determine what requirements must be met under its law to protect the interests of third parties with regard to items to be transferred.

Article 22. Immobilizing, confiscation and transfer of property

1. When one of the Parties is aware of the existence of the fruits or instrumentalities of criminal offences in the territory of the other Party which may be subject to seizure or preventive measures under the laws of that State, it may so inform the central authority of that State. The latter shall provide any information received to its jurisdictional authorities with a view to determining what action should be taken. Those authorities shall act in accordance with the laws of their country and shall, through their central authority, inform the other Party of any action taken.

2. The Parties shall assist each other, in accordance with their respective legislation, in procedures involving seizure, confiscation, compensation to victims of criminal offences and payment of fines imposed by a judgement in a criminal proceeding.

3. The Party having in its custody the fruits or instrumentalities of a criminal offence shall dispose thereof in accordance with its domestic legislation. To the extent permitted by its legislation, either Party may transfer to the other the confiscated property or the proceeds from the sale thereof.

Article 23. Authentication of documents and certification

1. Without prejudice to any authentication or certification required under its legislation, the requested State shall authenticate all documents or copies thereof and shall, provided that there is no conflict with its own legislation, issue certification for items in the manner requested by the requesting State.

2. In order to facilitate the task of complying with special authentication or certification requirements, the requesting State shall include with the request any relevant forms or shall describe any special procedure to be followed.

CHAPTER IV -- FINAL PROVISIONS

Article 24. Compatibility with other treaties, agreements or arrangements

1. The assistance and procedures set forth in this Treaty shall not prevent either Party from granting assistance to the other Party by virtue of the provisions of other more favourable international agreements to which it may be a party. The Parties may also provide assistance pursuant to any relevant bilateral agreement, arrangement or practice which is more favourable.

Article 25. Consultations

1. The central authorities of the Parties may consult, at times mutually agreed to by them, for the purpose of facilitating implementation of this Treaty.

Article 26. Liability

1. The domestic law of each Party governs liability for damage arising out of the actions of its authorities in implementation of this Treaty.

2. Neither Party shall be responsible for damage arising out of the actions of the authorities of the other Party in making or executing a request pursuant to this Treaty.

Article 27. Ratification, entry into force and termination

1. This Treaty shall be subject to ratification, and the instruments of ratification shall be exchanged at Madrid.

2. This Treaty shall enter into force when the instruments of ratification are exchanged.

3. Either Party may terminate this Treaty by written notification to the other Party. The termination shall take effect six months after the date of notification.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Treaty.

DONE at Montevideo on 19 November 1991, in duplicate in the Spanish language, both texts being equally authentic.

For the Kingdom of Spain:

INOCENCIO FÉLIX ARIAS

For the Eastern Republic of Uruguay:

HÉCTOR GROS ESPIELL

[TRANSLATION — TRADUCTION]

TRAITÉ D'ASSISTANCE LÉGALE MUTUELLE EN MATIÈRE PÉNALE ENTRE LE ROYAUME D'ESPAGNE ET LA RÉPUBLIQUE ORIENTALE DE L'URUGUAY

Table des matières

Chapitre I - Dispositions générales

Article 1... Objet du traité

Article 2... Portée de l'entraide

Article 3... Autorités centrales

Article 4... Autorités compétentes

Article 5... Limitation de l'entraide

Chapitre II - Exécution des demandes

Article 6... Forme et contenu des demandes

Article 7... Législation applicable

Article 8... Ajournement des conditions d'exécution

Article 9... Confidentialité

Article 10... Rapport d'exécution

Article 11... Limites d'utilisation de l'information ou évidence obtenue

Article 12... Coûts

Chapitre III Forme d'aide

Article 13... Remise de pièces

Article 14... Transmission de documents officiels

Article 15... Restitution de documents et évidence

Article 16... Comparution sur le territoire de l'État requérant

Article 17... Comparution sur le territoire de l'État requis

Article 18... Transfert des personnes dans les procédures criminelles

Article 19... Sauf-conduit

Article 20... Localisation ou identification des personnes

Article 21... Perquisition, saisie, confiscation et restitution des pièces

Article 22... Immobilisation, confiscation et transfert de propriété

Article 23... Authentification des documents et certification

Chapitre IV - Dispositions finales

Article 24... Compatibilité avec d'autres traités, accords et arrangements

Article 25... Consultations

Article 26... Responsabilité

Article 27... Ratification, entrée en vigueur et dénonciation

Le Royaume d'Espagne et la République orientale de l'Uruguay désignés ci-après par les "Parties".

Souhaitant établir des liens juridiques plus étroits et promouvoir une coopération internationale plus efficace grâce à l'assistance légale mutuelle en matière criminelle en vue de l'investigation et de la poursuite des infractions.

Reconnaissant que plusieurs activités criminelles constituent une menace sérieuse pour l'humanité et prennent la forme d'opérations criminelles transnationales et que des preuves et des éléments relatifs aux infractions criminelles peuvent fréquemment être trouvés dans plusieurs États membres.

Ont décidé sur la base des principes de souveraineté nationale, de droits égaux et d'avantages mutuels de conclure un traité d'assistance légale mutuelle dans les termes suivants :

CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1. Objet du traité

1. Les parties se prêtent mutuellement assistance en vertu des dispositions du présent traité aux fins des enquêtes et des poursuites pénales et pour des procédures judiciaires relatives aux affaires criminelles.

2. A l'exception des situations décrites à l'article 21, l'aide est fournie même dans le cas où l'acte motivant la demande est considéré ou non comme une infraction selon la législation de l'État requis.

3. Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 16, le présent traité ne peut autoriser les autorités ou une personne de l'État requérant à assumer dans le territoire de l'État requis des fonctions qui selon la législation de ce dernier relèvent de ses autorités.

4. Le seul objet du présent traité est d'établir une aide mutuelle entre les parties. En conséquence, les dispositions du présent traité n'accordent à aucune personne le droit d'obtenir, de supprimer ou d'exclure une preuve ou d'opposer un refus à une demande d'aide.

Article 2. Portée d'assistance

L'entraide comprend :

- (a) La notification de documents
- (b) La collecte de témoignages ou de dépositions, procéder à des évaluations d'experts et examiner des objets et des sites ;
- (c) La recherche ou l'identification des personnes
- (d) notifier aux témoins ou aux experts qu'ils doivent se présenter volontairement pour témoigner dans l'État requérant ;
- (e) transférer des personnes qui font l'objet d'une procédure criminelle afin qu'elles soient présentées comme témoins ou pour toute autre qualité indiquée dans la demande;
- (f) Prendre des mesures de précaution ou d'immobilisation de propriétés

- (g) Exécuter les demandes de recherches et de saisies ;
- (h) Fournir des documents et autres preuves ;
- (i) Immobilisation ou confiscation de propriétés ou transfert de la propriété confisquée et acquitter la compensation et les amendes fixées dans un jugement criminel; et
- (j) Fournir toute autre forme d'aide non prohibée par la législation de l'État requérant régissant l'enquête et la poursuite des infractions criminelles.

Article 3. Autorités centrales

1. Chaque État contractant désigne une autorité centrale chargée de présenter et de recevoir des demandes d'aide conformément au présent traité.
2. L'autorité centrale dans le Royaume d'Espagne est le ministère de la justice. Pour la République orientale de l'Uruguay, l'autorité centrale est le ministère de l'éducation et de la culture.
3. Les autorités centrales communiquent directement entre elles aux fins du présent traité.

Article 4. Les autorités compétentes

1. L'aide décrite dans le présent traité est fournie par les autorités centrales respectives des parties.
2. Les demandes faites par une autorité centrale en application du présent traité doivent être basées sur des demandes d'aide provenant des autorités judiciaires ou des représentants du bureau du Procureur public de l'État requérant chargé de l'enquête ou de la poursuite des infractions criminelles.

Article 5. Limitation de l'entraide

1. L'autorité centrale de l'État requis peut refuser son aide si :
 - (a) La demande concerne une infraction à la législation qui ne constitue pas une infraction au regard du droit pénal ordinaire ;
 - (b) La demande concerne une infraction de caractère fiscal. Toutefois l'aide doit être fournie si l'infraction concerne une fausse déclaration intentionnelle faite oralement ou par écrit ou s'il s'agit d'une omission intentionnelle dans le but de soustraire un revenu provenant de tout autre infraction prévue par le présent traité ;
 - (d) La personne citée dans la demande a été acquittée ou a accompli une peine dans l'État requis pour une infraction mentionnée dans la demande. Toutefois cette disposition ne peut être invoquée pour refuser l'aide dans des cas où d'autres personnes sont impliquées ; ou
 - (e) L'exécution de la demande est contraire à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de l'État requis.
2. Avant de rejeter une demande d'entraide en vertu du présent article, l'autorité centrale de l'État requis tient avec l'autorité centrale de l'État requérant des consultations pour

débattre des conditions qu'elle juge nécessaires et moyennant lesquelles elle serait en mesure de fournir l'aide demandée. Si l'État requérant souscrit à ces conditions, il est tenu de s'y conformer.

3. Sous réserve des dispositions de l'article 14, si l'Etat requis refuse l'aide, il doit en informer l'autorité centrale de l'État requérant et expliquer les raisons du refus.

CHAPITRE II - EXÉCUTION DES DEMANDES

Article 6. Forme et contenu des demandes

1. Les demandes sont présentées par écrit mais, en cas d'urgence, l'autorité centrale de l'État requis peut accepter une demande présentée sous une autre forme. La demande doit alors être confirmée par écrit dans un délai de dix jours.

2. La demande doit contenir les informations suivantes :

(a) Le nom de l'autorité chargée de mener l'enquête, les poursuites ou la procédure visée par la demande ;

(b) Un exposé de l'objet et de la nature de l'enquête, des poursuites ou de la procédure et, notamment, la nature des infractions pénales visées par la demande ;

(c) Une description des éléments de preuve et des renseignements demandés ou de l'aide requise ;

(d) Un exposé du but dans lequel les éléments de preuve, les renseignements ou autre forme d'aide sont demandés.

(e) Les normes juridiques applicables ainsi que le texte des dispositions pertinentes ; et

(f) L'identité des personnes qui font l'objet d'enquête ou qui sont poursuivies dans la mesure du possible;

3. Dans la mesure où cela est nécessaire, toute demande doit en outre comporter:

(a) Des renseignements sur l'identité et le domicile des personnes recherchées pour témoigner ;

(b) Des renseignements sur l'identité et l'adresse des personnes auxquelles des pièces doivent être adressées et le lien qui existe entre ces personnes et la procédure ;

(c) Des renseignements sur l'identité des personnes recherchées et le lieu où elles sont susceptibles de se trouver ;

(d) une description précise de la personne et du lieu devant faire l'objet d'une perquisition et des objets à saisir ;

(e) Une liste de questions à poser pendant la déposition dans l'Etat requis ainsi que la description de la manière dont la déposition doit être obtenue et enregistrée;

(f) Une description de toute procédure particulière à suivre pour exécuter la demande ;

(g) Des indications sur les remboursements auxquels pourra prétendre la personne appelée à comparaître dans l'État requérant ;

(h) Tout autre renseignement pouvant être porté à la connaissance de l'État requis pour lui faciliter l'exécution de la demande.

Article 7. Législation applicable

1. Les demandes doivent être exécutées conformément à la législation de l'État requis à moins que le traité n'en stipule autrement.

2. L'autorité centrale de l'État requis doit exécuter la demande promptement et, si c'est nécessaire, la transmettre à l'autorité judiciaire ou aux autres autorités juridictionnelles pour suite à donner.

A la demande de l'État requis, l'État requérant doit fournir son aide conformément aux demandes spéciales ou aux procédures à moins que ces derniers soient incompatibles avec la législation nationale.

Article 8. Ajournement des conditions d'exécution

L'État requis peut ajourner l'exécution de la demande ou, à la suite de consultations avec l'autorité centrale de l'État requérant, imposer des conditions dans le cas l'exécution aurait une influence sur une enquête criminelle en cours ou une procédure quelconque dans l'État requis. Si l'État requérant accepte l'aide sous certaines conditions, la demande doit être exécutée conformément aux conditions proposées.

Article 9. Confidentialité

A la demande de l'Etat requérant, la requête et son exécution doivent rester confidentiels. Si la requête ne peut être acceptée sans rupture de cette confidentialité, l'Etat requis doit en informer l'État requis qui décidera alors s'il maintient ou non cette requête.

Article 10. Rapport sur l'exécution

1. A la demande de l'autorité centrale de l'État requérant, l'autorité centrale de l'État requis doit, pendant une période raisonnable faire rapport sur les progrès accomplis dans l'exécution de la demande.

2. L'autorité centrale de l'État requis doit faire rapport rapidement sur l'exécution de la requête et doit communiquer toute information ou preuve obtenues à l'autorité centrale de l'État requérant.

3. S'il est impossible d'exécuter la requête dans sa totalité ou en partie, l'autorité centrale de l'État requis doit en informer l'autorité centrale de l'État requérant immédiatement et doit indiquer les raisons de la non-exécution.

Article 11

Limitation de l'utilisation de l'information ou de la preuve obtenue

1. A moins que l'État requis ne donne son accord, l'État requérant ne peut utiliser l'information ou la preuve obtenues conformément au présent traité que pour l'enquête ou la procédure indiquée dans la demande.

2. L'autorité centrale de l'État requis peut demander que l'information ou les éléments de preuve obtenus selon les termes du traité restent confidentiels conformément aux conditions spécifiées. Dans ce cas, l'État requérant doit faire le maximum pour respecter ces conditions.

3. L'information ou les éléments de preuve qui ont été divulgués dans l'État requérant conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article peuvent être utilisés par la suite dans d'autres domaines.

Article 12. Coûts

L'État requis assume tous les frais liés à l'exécution de la demande, à l'exception des honoraires des experts jurés, des dépenses de traduction et de transcription et des dépenses extraordinaires découlant de demandes ou de spéciales et des indemnités et frais de voyage visés aux articles 17 et 18 qui doivent être payés par l'État requis.

CHAPITRE III - LES FORMES D'ASSISTANCE

Article 13. Remise de pièces

1. L'autorité centrale de l'État requis doit faire tout son possible pour procéder efficacement à la remise de tout document relatif à une demande de l'État requérant en vertu du présent traité.

2. L'autorité centrale de l'État requérant doit transmettre une citation à comparaître devant une autorité de l'État requis dans un délai raisonnable avant la date de la comparution.

3. L'autorité centrale de l'État requis envoie un justificatif de la remise des pièces sous la forme spécifiée dans la demande.

4. Si la remise des pièces ne peut être effectuée, l'autorité centrale de l'État requis doit en donner les raisons à l'autorité centrale de l'État requérant .

Article 14. Production de documents officiels

A la demande de l'État requérant, l'État requis doit:

(a) fournir des copies de documents, dossiers ou renseignements accessibles au public que détiennent les administrations et organismes officiels de l'État requis ; et

(b) fournir des copies de documents, dossiers ou renseignements officiels non accessibles au public que détiennent les administrations et organismes de l'État mais qui ne sont pas accessibles au public dans les mêmes conditions que celles où elles seraient mises à la disposition de ses propres autorités. Si l'aide décrite dans le présent paragraphe est refusée, l'autorité centrale ne sera pas obligée d'en fournir les raisons.

Article 15. Restitution de documents et autres pièces

A la demande de l'autorité centrale de l'État requis, l'État requérant renvoie dans les meilleurs délais possibles, tous les documents et autres pièces fournis en exécution de la demande effectuée selon le présent traité.

Article 16. Déposition dans l'État requis

Toute personne dont le témoignage est recherché dans l'État requis en vertu du présent traité sera contrainte, si nécessaire, à comparaître, conformément à la législation de l'État requis, devant l'autorité juridictionnelle pour déposer ou produire des documents, des dossiers ou des éléments de preuve.

2. L'État requis doit indiquer dans un délai raisonnable la date et le lieu de la déposition ou de la production des dits documents, dossiers ou éléments de preuve. Chaque fois que c'est possible, les autorités centrales doivent se consulter en vue de fixer une date qui soit acceptable pour les deux parties.

3. L'État requis autorise durant l'exécution de la demande, la présence de toute personne expressément désignée dans la demande et permet à celle-ci d'interroger la personne appelée à déposer ou à produire des éléments de preuve dans la manière prévue par les lois de l'État requis. La déposition se fera conformément aux procédures établies par les lois de l'État requis.

4. Si la personne visée au paragraphe 1 fait valoir une immunité, une incapacité ou un privilège, prévus par la législation de l'État requérant, une décision à cet égard sera prise par l'autorité juridictionnelle de l'État requis avant l'exécution de la demande.

5. Tout document, dossier ou élément de preuve fournis par le témoin ou obtenus grâce à sa déposition ou durant sa déposition doivent être transmis à l'État requérant en même temps que la déposition.

Article 17. Comparution sur le territoire de l'État requérant

Si l'État requérant demande qu'une personne compareisse sur son territoire pour une déposition ou pour fournir des informations, la comparution du témoin ou de l'expert se fait sur une base volontaire devant l'autorité juridictionnelle de l'État requérant à l'invitation de l'État requis. S'il y a lieu, l'autorité centrale de l'État requis peut enregistrer par écrit le consentement de la personne de comparaître dans l'état requérant. L'autorité centrale de l'État requis doit informer l'autorité centrale de l'État requérant rapidement de la réponse. Lorsqu'il invite une personne à comparaître, l'État requérant doit indiquer la proportion dans laquelle il remboursera à la personne ses frais de voyage et de séjour dans l'État requérant.

Article 18. Transfert de personnes dans une procédure criminelle

1. Une personne qui fait l'objet d'une procédure criminelle dans un État requis et dont la présence dans l'État requérant est nécessaire pour une entraide conformément au présent

traité doit être transférée à cette fin dans l'État requérant à condition que la personne et l'état requis acceptent ce transfert.

2. Une personne qui fait l'objet d'une procédure criminelle dans un État requérant et dont la présence dans l'État requis est nécessaire pour une entraide conformément au présent traité doit être transférée à cette fin dans l'état requérant à condition que la personne et les deux états donnent leur accord.

3. Pour l'application du présent article :

(a) L'État d'accueil a l'autorité légale et l'obligation de garder la personne transférée en détention sauf autorisation contraire de l'état d'envoi;

(b) L'État d'accueil remet la personne transférée à l'État d'envoi dès que les circonstances le permettent ou selon que les autorités centrales en sont convenues ;

(c) Il n'est pas nécessaire pour l'État d'envoi de mettre en œuvre une procédure d'extradition pour obtenir le retour de la personne transférée ;

(d) Le temps passé en détention sur le territoire de l'État d'accueil par la personne transférée sera pris en compte dans la durée de la peine qui lui sera imposée dans l'État d'envoi ; et

(e) Le séjour de la personne dans l'État d'accueil ne peut en aucun cas dépasser le temps qui lui reste pour terminer sa peine ou 90 jours à moins que la personne et les deux États tombent d'accord pour son extension.

Article 19. Sauf-conduit

1. La comparution ou le transfert d'une personne qui accepte de faire une déclaration ou de témoigner conformément aux dispositions des articles 17 et 18 si cette personne ou l'Etat d'envoi l'ont demandée avant la date de la comparution ou du transfert devront faire l'objet d'un sauf conduit délivré par l'État d'accueil selon les termes desquels , elle ne pourra pas lors de son séjour dans cet État :

(a) Détendue ou poursuivie pour une infraction qui a été perpétrée avant son départ du territoire de l'État d'envoi ;

(b) Etre tenue de faire une déclaration ou faire une déposition dans une procédure non spécifiée dans la demande ; ou

(c) Détendue ou poursuivie sur la base de sa déposition, à l'exception d'outrage au tribunal et de faux témoignage.

2. Le sauf-conduit délivré aux fins du paragraphe ci-dessus n'est plus valide si la personne prolonge de son plein gré son séjour sur le territoire de l'État d'accueil de plus de 10 jours à compter du moment où sa présence dans cet État n'est plus nécessaire et que l'État d'envoi en est informé.

Article 20. Localisation ou identification des personnes

L'État requis fait son possible pour localiser ou identifier de façon certaine les personnes désignées dans la demande.

Article 21. Perquisition, saisie, confiscation et restitution de pièces

1. L'État requis exécute toute demande visant la recherche, la saisie, la confiscation et la livraison de pièces -documents, dossiers ou pièces si l'autorité juridictionnelle estime que l'information fournie dans la demande justifie une telle action. L'action sera sujette à la procédure et à la législation de fond de l'État requis.

2. Conformément au paragraphe 2 de l'article 5, l'État requis devra fixer les conditions et modalités qu'il estime nécessaires pour protéger les droits des tiers sur l'objet à transférer

Article 22. Immobilisation, confiscation et transfert de propriété

Lorsqu'une des parties est informée de l'existence d'articles ou d'instruments qui sont le produit d'infractions criminelles sur le territoire de l'autre partie et qui peuvent faire l'objet d'une saisie ou de mesures préventives selon la législation de cet Etat, elle doit en informer l'autorité centrale de cet État. Ce dernier doit fournir toute information qu'elle a reçue de ses autorités juridictionnelles afin de déterminer le type d'action à entreprendre. Ces autorités doivent conformément aux lois de leur pays et par l'intermédiaire de leur autorité centrale, informer l'autre partie de toute action à entreprendre.

2. Les parties doivent s'assister mutuellement conformément à leur législation respective dans les procédures relatives à la saisie, à la confiscation, à la compensation des victimes d'infractions criminelles et au paiement des amendes imposées par un jugement dans une procédure criminelle.

3. La partie qui a la responsabilité des articles ou des instruments d'une infraction criminelle peut en disposer conformément à sa législation nationale. Dans la mesure où sa législation le lui permet, l'une des parties peut transférer à l'autre et vice-versa toute propriété confisquée ou les produits de vente.

Article 23. Authentification des documents et certification

1. Sans préjudice des authentifications et des certifications demandée par sa législation, l'État requis doit identifier tous les documents ou copies et doit produire des certifications des articles de la manière demandée par l'État requérant dans la mesure où il n'existe pas de conflit avec sa propre législation.

2. L'État requérant doit inclure dans la demande, les formulaires appropriés et indiquer les procédures spéciales à suivre afin de faciliter la conformité de celle-ci avec les authentifications spéciales et les exigences de certification.

CHAPITRE IV - DISPOSITIONS FINALES

Article 24. Compatibilité avec d'autres traités, accords et arrangements

1. L'aide et les procédures prévues par le présent Traité n'empêchent pas les Etats contractants de se prêter mutuellement assistance en application des dispositions d'autres accords internationaux auxquels ils peuvent être parties. Les États contractants peuvent aussi

fournir cette aide en vertu d'arrangements, accords et pratiques bilatéraux qu'ils jugent appropriés.

Article 25. Consultations

1. Les autorités centrales peuvent se concerter à des moments convenus d'un commun accord pour faire en sorte que le traité soit appliqué le plus efficacement possible.

Article 26. Responsabilité

La législation nationale de chaque partie régit la responsabilité pour des dommages provenant des actions de leur autorité respective dans l'application du traité.

2. Les parties ne sont pas responsables des dommages provenant des actions des autorités de l'autre partie dans l'exécution de la demande selon les dispositions du présent traité.

Article 27. Ratification, entrée en vigueur et dénonciation

1. Le présent traité est soumis à ratification et les instruments de ratification seront échangés à Madrid ;

2. Le présent traité entrera en vigueur lorsque les instruments de ratification seront échangés.

3 Chacune des parties peut mettre fin au traité moyennant une notification écrite à l'autre partie.

La dénonciation prendra effet six mois après la date de la notification.

En foi de quoi les soussignés à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs ont signé ce traité.

Fait à Montevideo le 19 novembre 1991, en deux exemplaires en espagnol, les deux textes faisant foi.

Pour le Royaume d'Espagne :

INOCENCIO FÉLIX ARIAS

Pour la République orientale de l'Uruguay :

HÉCTOR GROS ESPIELL